

## Los empresarios catalanes reclaman un pacto en favor de la inmigración: "La necesitamos como el aire"

**Un informe de Foment del Treball calcula que se precisarán 140.000 inmigrantes al año**

**"Sin inmigración no podemos producir", asegura Sánchez Llibre**

**ÁLVARO SÁNCHEZ MADRID**

España camina imparable hacia los 50 millones de habitantes, y rebasar esa frontera, tan redonda, conllevará múltiples consecuencias, del mercado de trabajo, al acceso a la vivienda, la sanidad o la planificación del transporte. Esos números de récord, sin embargo, se quedan cortos para los empresarios: un informe publicado ayer por el servicio de estudios de la patronal catalana Foment del Treball (SBEES) calcula que serán necesarios 140.000 inmigrantes al año en edad laboral para que el empleo no se resienta.

"Sin inmigración no podemos producir y no somos competitivos. Los poderes públicos nos tienen que escuchar", insistió su presidente, Josep Sánchez Llibre, quien reclamó un pacto social entre los poderes públicos y la sociedad civil para favorecer la llegada de tra-

bajadores foráneos. Durante su intervención en el centro cultural CaixaForum de Madrid, el máximo representante de la patronal catalana advirtió de que las empresas están teniendo problemas para cubrir los puestos vacantes, y anunció que enviará el documento a la CEOE, los sindicatos, el Gobierno central y las comunidades autónomas para iniciar un diálogo al respecto.

El texto, elaborado por Opina360, concluye que sin inmigración habría un déficit en la próxima década de 1,4 millones de trabajadores, y un 6,3% de los empleos no podría ser cubierto, un porcentaje que se elevaría hasta el 12% en comunidades como Galicia y Castilla y León. "Las empresas necesitamos sí o sí de la inmigración para ser productivos y competitivos, y para generar riqueza y empleo, con el objetivo último de reducir las desigualdades económicas", dijo Sánchez Llibre, que repitió el mismo mensaje una y otra vez.

El empresario barcelonés ha dicho ser consciente de la dificultad para alcanzar pactos en un momento de polarización política como el actual, donde además las encuestas muestran un crecimiento electoral de opciones políticas xenófobas, pero no rehúye la batalla: la semana que viene volverá a tratar el

tema en una intervención conjunta con su homólogo de CEOE, Antonio Garamendi. "La inmigración a veces se asocia a delincuencia, vandalismo y violencia. Los poderes públicos deben resolver estas situaciones. No se pueden generalizar, pero es cierto que la opinión pública tiene esta percepción", ha lamentado.

El aumento de la inseguridad es el punto negativo que la encuesta que acompaña al estudio asocia a la inmigración, concretamente un 27,9% de los preguntados vinculan ambas realidades. En el lado positivo, más de un 40% cree que su llegada contribuye positivamente a la economía.

La publicación señala que España se encuentra inmersa en un profundo cambio demográfico. En 2035, apunta, la suma de población originaria del extranjero y sus descendientes nacidos en España podrían superar el 34% del total. Es decir, un tercio de la población estaría vinculada a la inmigración directa o indirectamente, como primera o segunda generación.

Su incorporación al mercado laboral, aseguran, se antoja muy relevante para la sostenibilidad de las pensiones y rejuvenecer una población española que ya supera los 84 años de esperanza de



**Vecinos latinos cruzan un paso de cebra en la zona de Pueblo Nuevo (Madrid).** S. SÁNCHEZ

vida al nacer, la tercera mayor del mundo, porque tres de cada cuatro llegados del exterior tiene menos de 40 años.

El director de Opina 360 y coordinador del informe, Juan Francisco Caro, ha remarcado que es hora de plantearse qué necesidades formativas y qué perfiles necesita España, para que su integración en el mercado laboral sea más rápida. "En la construcción no puede trabajar cualquiera", ha puesto como ejemplo.

Una de las preocupaciones que sobrepasó la jornada es cómo cubrir la próxima jubilación de millones de trabajadores. Según el estudio, una de cada cinco personas activas tiene 55 años o más, con casos extremos como el 29,8% de Zamora.

En España, las muertes superan ampliamente a los nacimientos —en 2024 hubo 433.547 defunciones, pero solo se dio a luz a 322.034 bebés—. La tendencia no es nueva, sin embargo, según

el estudio, España registra el quinto crecimiento demográfico más intenso de la UE, un 20,1% entre 2000 y 2024, frente al 4,7% del conjunto de los socios, algo que se debe a la inmigración.

En ese crecimiento existen ciertos desequilibrios, porque las provincias costeras mediterráneas, los archipiélagos y el área alrededor de Madrid concentra el 89,1% del aumento de habitantes registrado en el primer cuarto de siglo. "La población se

concentra cada vez más en ciudades, las más grandes mantienen su peso, mientras las pequeñas y medianas, en muchos casos capitales de provincias, ganan protagonismo a costa de los pueblos. Como resultado, amplios espacios de la España interior siguen despoblándose lentamente", resume el texto.

¿Es la inmigración la solución a ese problema? Félix Riera, director de la SBEES, estima que en buena medida, sí. "La actual situación económica del país está definida por el potencial de la inmigración", afirmó. "La economía va en la buena dirección, pero necesitamos de mano de obra cualificada y no cualificada, y tenemos verdaderos problemas para absorber la demanda de nuestras empresas. [...] La inmigración es necesaria para la sostenibilidad de la sociedad del bienestar. Las empresas la necesitamos como el agua para beber o el aire para respirar", subrayó Sánchez Llibre.

**En la próxima década podría haber un déficit de 1,4 millones de trabajadores**

**El informe revela que un 6,3% de los empleos no podría ser cubierto**

## Trabajo pactará los permisos de fallecimiento con los sindicatos tras el rechazo patronal a ampliarlos

**EMILIO SÁNCHEZ HIDALGO MADRID**

Una vez más, el Ministerio de Trabajo y los empresarios no se entienden. Al igual que la semana pasada en la negociación para reformar la prevención de riesgos laborales, como en el intento de reducir la jornada y como en los últimos cinco incrementos del salario mínimo. La ampliación de los permisos de fallecimiento —hasta diez días, en vez de los dos días extensibles a cuatro que rigen ahora— tampoco concilia

la posición del Gobierno con la de los empresarios, según explicó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, al salir de la segunda reunión sobre el tema, celebrada ayer por la tarde.

El número dos del Ministerio dio por cerrada la negociación con CEOE y Cepyme y buscará un acuerdo con CC OO y UGT. Para convertirse en ley, ese futuro pacto exige el aval del Parlamento. Tanto Pérez Rey como las centrales han pedido a los grupos que se posicionen

a favor de la modificación, que incluye la creación de un permiso de cuidados paliativos (15 días) y otro de acompañamiento en la eutanasia (de un día). El de diez días por fallecimiento de un familiar, según plantea el ministerio, se podría repartir a lo largo de cuatro semanas desde el día de la muerte.

"Damos por concluida esta mesa con las patronales para regular los permisos y buscaremos un acuerdo con los sindicatos, como va-

mos a hacer en prevención de riesgos", dijo el secretario de Estado, muy crítico con el rechazo patronal a aumentar los permisos: "¿Con dos días se puede resolver el dolor de la pérdida de un familiar? ¿Algún empresario entiende

**El número dos del Ministerio da por cerrada la negociación con CEOE y Cepyme**

que puede tener a un trabajador en condiciones en los días siguientes de perder un hijo?". Pérez Rey detalló que las organizaciones empresariales han planteado cambios en la normativa actual, pero sin ampliación de los permisos. "No a todo y, por favor, retrocedan en lo que ya tienen", interpretó.

CEOE y Cepyme no comparecieron tras la reunión, pero expresaron su posición en un comunicado conjunto. "No podemos asumir la propuesta del ministerio sobre

permisos en ninguno de sus extremos". En su opinión, este diálogo "no se ha tratado en ningún momento de una mesa de negociación" y consideran que "los encuentros mantenidos son fruto de las quejas planteadas por la representación empresarial tras el sorpresivo anuncio al margen del diálogo social, descontento al que se sumaron después los sindicatos". A la vez, dijeron "lamentar" que Trabajo "haya decidido poner fin a estas consultas tripartitas".